

*Doc. nº 018/1990*

*"LOS ASPECTOS INVISIBLES" DEL  
DECLIVE ECONOMICO: EL CASO DE  
ASTURIAS.*

*RODOLFO GUTIERREZ PALACIOS  
JOSE MARIA GARCIA BLANCO*

Rodolfo Gutiérrez  
José María García Blanco

LOS ASPECTOS "INVISIBLES" DEL DECLIVE ECONOMICO:  
EL CASO DE ASTURIAS

Las ciencias sociales se han encontrado en los últimos años con un tema relativamente nuevo: las denominadas "regiones industriales en declive". Con ese término un tanto vago se suele referir la situación de algunos territorios de temprana industrialización, con una configuración económica típica en la que predomina una concentración de grandes empresas en industrias básicas, que, habiendo sido prósperos y dinámicos en el pasado reciente, enfrentan en las últimas décadas una conjunción de problemas económicos y sociales que las han hecho perder la pasada prosperidad, ofreciendo a su población niveles de riqueza y bienestar declinantes.

En esta ponencia intentaremos recorrer las aportaciones teóricas más relevantes que ha ofrecido la sociología para comprender los procesos de declive industrial. Algunas de esas aportaciones nos servirán, posteriormente, para analizar la configuración y las estrategias de los principales actores económicos de Asturias, una típica "región industrial en declive", en la que, además, este proceso se ha presentado con duración e intensidad especialmente acusadas.

## 1. LA CONTRIBUCION DE LAS CIENCIAS SOCIALES A LA COMPRENSION DEL DECLIVE INDUSTRIAL

Como suele ocurrir, la urgencia de los problemas que enfrentan estos territorios ha hecho que la necesidad de soluciones económicas y políticas vaya por delante de la reflexión teórica, de manera que el carácter específico de lo que solemos llamar "regiones industriales en declive" (RID) es confuso y la comprensión del proceso que va de la prosperidad al declive y, eventualmente, de éste a una nueva prosperidad, es todavía incompleta. La mayor parte de la literatura existente sobre RID es muy reciente, de valor desigual, orientada a la descripción de algún caso individual y escasamente interesada en las cuestiones conceptuales y teóricas.

Con todo, los esfuerzos explicativos de la situación de las RID son desiguales entre las diferentes ciencias sociales. La economía --principalmente la economía regional y, aunque en menor medida, también la economía industrial-- ha dedicado al tema más atención y lo ha enfrentado con más continuidad y recursos teóricos que la sociología o la ciencia política. Diríamos que estas ciencias se han ocupado de algunas consecuencias del declive industrial entendidas como "problemas sociales" (excedentes laborales, desempleo,

u otros similares), pero escasamente de la explicación de los procesos de declive. Sin embargo, la resistencia a comprender los procesos de cambio económico como procesos en los que intervienen, junto a los factores económicos más "visibles" --tanto de oferta como de demanda--, una multitud de factores más "invisibles", de carácter cultural, político e institucional, puede ser una de las debilidades más frecuentes en los análisis del desarrollo económico de las "viejas áreas industriales" (Doeringer et al., 1987).

La propias explicaciones económicas suelen reconocer, en ocasiones, esa debilidad en la comprensión de los procesos de declive. En un repaso reciente a la literatura económica sobre las RID se concluye la conveniencia de complementar ambos análisis (Steiner, 1985). Del repaso y la crítica de los diferentes modelos teóricos explicativos del desarrollo regional, Steiner concluye una hipótesis explicativa --con la que coincidimos en sus términos generales-- que pone el énfasis en los aspectos endógenos y en las deficiencias de la oferta. Las RID se caracterizarían, ante todo, por ser regiones en las que sus principales actividades económicas se encuentran en la etapa final del "ciclo de vida", un estadio de su desarrollo marcado por inflexibilidades de la oferta y por una falta de capacidad para la innovación. Es esencialmente del lado de la oferta, no de la escasez de demanda, de donde procede que las áreas de tradición industrial se hagan "viejas".

Pero este tipo de hipótesis ofrece sólo --como el mismo Steiner reconoce-- un marco macroeconómico de explicación de los procesos de declive, pero, por un lado, deja abiertos una serie de importantes interrogantes relativos a las conductas "microeconómicas" que causan el cambio en los grados de flexibilidad de los actores económicos, y, por otro lado, no da cuenta de por qué hay esa carencia de incentivos a permanecer en las primeras e innovadoras fases del ciclo de vida. Sin complementar con respuestas a estas cuestiones la explicación económica tiene un tono muy determinista; se supone que este es un ciclo de evolución necesario y que todas las regiones, a medida que se van haciendo "viejas", seguirían los mismos estadios que las actuales RID. Una suposición a la que hay que oponer no sólo reparos teóricos, sino también evidencias empíricas de territorios que, habiendo sido "viejas" áreas industriales, han seguido trayectorias que no se corresponden con ese "determinismo" que apuntan las teorías económicas del ciclo del producto", como han reflejado ya algunos estudios sobre casos como los de áreas regionales en Massachusetts (Doeringer et al., 1987) o Baden-Württemberg (Sabel, 1988).

La sociología y la ciencia política, aunque apenas han dedicado una atención explícita a estas cuestiones, sí que han producido algunas aportaciones relevantes. Dispersas

y sin unidad teórica, estas aportaciones pueden agruparse en tres conjuntos:

- a) La teoría de la acción colectiva de Olson y su aplicación a la explicación del auge y el declive económico de los países.
- b) Los planteamientos que vinculan ciertas formas de dinamismo/estancamiento económico con las subculturas de un territorio, particularmente con rasgos de las subculturas política e industrial.
- c) La problemática de la "regulación política del declive", entendiendo por tal los procesos de formación de las políticas públicas, tanto en las acciones dirigidas a administrar como en las dirigidas a revertir el declive.

### 1.1. Acción colectiva y declive económico

Esta sigue siendo perspectiva muy próxima a las preocupaciones económicas; no en vano Olson es un economista que ha desarrollado su teoría partiendo de preguntas típicamente económicas, pero que en sus respuestas ha vinculado distintas parcelas de las ciencias sociales, tales como la ciencia política, la sociología o la historia.

En su aplicación de la teoría de la acción colectiva a la explicación de la diferente suerte económica de los países, Olson (1982) sostiene que la existencia y la actuación de un elevado número de coaliciones de intereses con fines distributivos es perjudicial para un territorio, por cuanto la actuación de éstas resultará, normalmente, negativa para la eficiencia y el crecimiento. En una expresión utilizada por el propio Olson, "una sociedad con un elevado número de coaliciones con finalidades distributivas se asemeja mucho a una tienda de porcelana china llena de gentes que, al intentar apoderarse de la mayor parte de su contenido, rompen mucho más de lo que se llevan" (Olson, 1984, p. 437).

Desde esta perspectiva se entiende que la actuación de las organizaciones de interés económicos contribuye a crear una serie de "rigideces sociales" en un doble sentido: por una parte hacen primar las estrategias dirigidas a la distribución en detrimento de las estrategias dirigidas a mejorar la eficiencia; por otra parte reducen la inclinación a la innovación. Este comportamiento es aplicable a diferentes tipos de coaliciones de intereses, y en general a todo grupo de individuos o empresas que sea capaz de definir

unos intereses específicos, de encontrar los "incentivos selectivos" necesarios para la pertenencia y de dotarse de un liderazgo estable. Los sindicatos --particularmente aquellos menos "inclusivos" (all encompassing), más vinculados a intereses muy localizados en un grupo ocupacional o en una gran empresa-- pueden ser el ejemplo más obvio de estas coaliciones de intereses, pero lo mismo podría aplicarse a las empresas o los grupos de empresas, a las asociaciones de profesionales y a diferentes tipos de grupos de presión. De hecho, los grupos que suelen estar predisuestos a organizarse antes y con más éxito son los sectores formados por un pequeño número de grandes empresas.

Olson introduce en su argumento dos circunstancias que contribuyen a reforzar el efecto de "rigidez social" en el comportamiento de las coaliciones de intereses. Por una parte, la proliferación de estas coaliciones de intereses es superior en aquellos territorios en los que se ha disfrutado de períodos largos de estabilidad política, en los que no se ha destruido o reprimido de forma violenta a tales grupos; una estabilidad que los grupos de intereses necesitan para tomarse el largo tiempo necesario para consolidar su organización.

Por otra parte, el grado en que los grupos de intereses son más abiertos (all encompassing), capaces de representar a grupos más amplios de la sociedad y a gamas de intereses más generales, amplía las probabilidades de que éstos actúen más orientados por la eficiencia general en lugar de por la distribución. Ahora bien, este tipo de coaliciones de intereses de gran representación social tendrán problemas mucho mayores para conseguir un liderazgo estable.

Algunas partes de la argumentación de Olson pueden resultar teórica o empíricamente discutibles. Eso nos parece, respecto, por una parte, del argumento histórico que vincula mayores rigideces sociales con estabilidad política y, por otra parte, de la idea de que la proliferación de coaliciones de intereses siempre dificulta la orientación hacia la eficiencia colectiva. Respecto a lo primero podrían encontrarse tantos ejemplos de territorios o países para apoyar esa argumentación como para apoyar la contraria. Respecto a lo segundo, parece probado que algunos territorios en los que hay una proliferación de coaliciones de ese tipo han encontrado vías de cooperación entre ellas, bajo formas de regulación llamadas "neocorporatistas" más o menos institucionalizadas, que han equilibrado considerablemente las inclinaciones a la eficiencia y a la distribución de estas coaliciones.

Hay, sin embargo, muchos aspectos de la argumentación de Olson que nos parecen particularmente relevantes para el caso de las RID. La inclinación de las coaliciones de

intereses a actuar por la distribución en lugar de por la eficiencia parece particularmente aplicable a estos contextos. Además, la configuración de las principales coaliciones de intereses económicos (sindicatos de trabajadores y empresarios) en estas regiones puede presentar un forma peculiar: la continuidad histórica de algunas de estas organizaciones puede darles recursos para mantener largo tiempo su carácter de representantes de los intereses generales aun cuando sus bases sociales se hayan reducido extraordinariamente. Esto podría aplicarse tanto a la formación de los sindicatos y su relación con los partidos políticos de origen ideológico común, como a la acción colectiva de los empresarios.

## 1.2. Cultura y declive económico

En los últimos años, las investigaciones realizadas sobre los fenómenos del auge y el declive industriales han revalorizado el concepto marshalliano del "distrito industrial" como el núcleo de un enfoque teórico en el que los aspectos socioculturales del desarrollo económico alcanzan una creciente relevancia. En conexión a ello, los economistas se encuentran más sensibilizados hacia lo que ellos denominan el "ambiente social y cultural" de los procesos productivos, "en el que las relaciones sociales, dentro y fuera de la producción, tanto en el momento de la acumulación como en el de la socialización, y las propensiones hacia el trabajo, el ahorro, el juego, el riesgo, etc., adquieren su peculiar timbre y carácter" (Becattini, 1987, p. 8). Pero, como puede comprobarse en las líneas anteriores, la falta de determinación conceptual a la hora de introducir consideraciones sociológicas en el discurso económico, comporta normalmente un uso genérico y difuso del concepto de cultura, que lo priva de todo valor explicativo y acaba por otorgarle un papel puramente residual, de auténtica "caja negra" donde guardar todo aquello para lo que el discurso económico convencional no encuentra una clara explicación.

La sociología, por su parte, pese a que en ella la relación entre cultura y cambios económicos es un tema ya clásico, no se ha preocupado hasta muy recientemente de aportar recursos conceptuales y teóricos para ayudar a resolver este problema. Y ello es en gran parte debido a que la relación entre cultura y cambios económicos suele tender a pensarse en analogía a los procesos originarios de industrialización, en los que se supone que jugaron un papel esencial complejos culturales de carácter universalista, que, por tanto, conllevaron la desaparición de las formas subculturales. Por ello, cuando se afirma y repite que las

RID se enfrentan a una situación en la que los necesarios cambios económicos son inseparables de un cambio cultural, no se está haciendo otra cosa que recurrir a una fórmula vacía y puramente retórica, o bien a una apelación genérica al "cosmopolitismo" como fuente de innovación.

Para poder desbloquear esa situación es preciso disponer de un concepto de cultura que posea un contenido algo más preciso y operativo que la mera y clásica referencia a un supuesto conjunto de "patrones valorativos comúnmente compartidos y, en cuanto tales, moralmente integradores". El concepto de cultura que va a servir de base a las reflexiones subsiguientes, en contra de esta tradición moral-integrativa, se perfila en el contexto problemático de las condiciones sociales de la comunicación. En este sentido, la cultura ha de ser entendida como un "stock" temático que, mediando entre interacción y lenguaje, proporciona las condiciones de la posibilidad de comunicarse. La cultura, pues, no implica necesariamente un contenido normativo, sino ante todo un acervo de orientaciones cognitivas que posibilita el distinguir entre contribuciones comunicativas más o menos adecuadas o inadecuadas (Luhmann, 1984, p.223, y Parsons, 1973).

A partir de ello es posible entender mejor y sacar más provecho de una serie de estudios empíricos, cada vez más numerosos y mejor documentados, que intentan descubrir las configuraciones culturales que o bien están contribuyendo "positivamente" a la evolución económica de ciertas áreas convertidas en paradigmas de auge, o bien "negativamente" en otros territorios convertidos en casos típicos de declive industrial.

En ese sentido, el caso de las llamadas "áreas de especialización flexible" en las regiones noreste y el centro-norte de Italia ha sido mencionado como representativo de una situación en la que se pueden encontrar rasgos de un subcultura "positiva". En ese caso el rasgo de la subcultura regional (quizá fuera más apropiado el adjetivo de "local") que merece destacarse es, principalmente, la existencia de una fuerte identidad colectiva de carácter localista. Este rasgo se expresa a través del predominio de subculturas políticas territoriales profundamente arraigadas y que, curiosamente, resultan ser de signo ideológico distinto pero cumpliendo una similar función (Trigilia, 1987). Tal es así que la repercusión en la vida económica de estos rasgos --o lo que podríamos llamar la dimensión de cultura industrial-- es similar tanto cuando se trata de áreas con un predominio de la tradición política católica o democristiana (las llamadas áreas "blancas") como cuando el predominio es de la tradición comunista (áreas "rojas").

En esos casos se entiende que una fuerte identidad colectiva contribuye a crear en los actores económicos,

tanto individuales como colectivos, orientaciones hacia la lealtad, la cooperación y la consideración del largo plazo. El sentido de pertenecer a una comunidad local o regional refuerza las conductas que prefieren, en términos de Hirschman (1970), la "lealtad", o eventualmente la "protesta", a la "salida". Una fuerte identidad colectiva refuerza también las relaciones de "alta confianza" entre los actores que, como ha señalado Sabel (1986) para el caso de las "áreas de especialización flexible", ha jugado un papel significativo en la configuración de formas no institucionalizadas de cooperación tanto verticales (entre trabajadores y empresas) como horizontales (entre empresas).

La identidad colectiva localista ha permitido, por otra parte, una forma específica de relación entre los grupos de intereses y los gobiernos locales según la cual éstos han podido --basándose en la solidez y la estabilidad de la subcultura política--, por una parte, disfrutar de una amplio margen de maniobra para distanciarse de la satisfacción a corto plazo de demandas particulares, y, por otra parte, disponer de una mayor capacidad para actuar como representantes de los intereses generales del territorio y, así, movilizar recursos de acción colectiva en beneficio del territorio.

Por el contrario, las RID se han convertido en el escenario típico donde encontrar configuraciones culturales "negativas" que representan un freno para el dinamismo económico. El declive económico parece asociarse a un proceso por el cual la subcultura económica se expresa progresivamente en formas de identidad colectiva de carácter defensivo. Quevit (1987) ha tipificado la serie de orientaciones cognitivas básicas que suelen componer la subcultura económica de las RID y actúan como frenos del desarrollo: paradigma de una gran industria motriz como eje del desarrollo, concepción del desarrollo "polarizado" en algunos focos territoriales, papel privilegiado de la gran empresa y prioridad para los escenarios de protección frente a los competidores.

La continuidad en una situación de declive contribuye a crear un clima económico marcado por la desconfianza en las propias fuerzas, una especie de "síndrome fatalista" que fía la inversión del proceso declinante a las grandes iniciativas exógenas, bloqueando las iniciativas endógenas y dificultando la articulación de estrategias cooperativas entre los actores colectivos del área, lo que impulsa a los agentes más dinámicos de ésta a la adopción de estrategias de "salida" del escenario regional.

En este punto es preciso poner de relieve la importancia que para esta dinámica declinante, amplificadora y acumulativa, tiene el peculiar proceso asturiano de concentración de las más relevantes actividades industriales

en unas pocas empresas públicas fuertemente protegidas. En efecto, todo sistema económico moderno, para poder constituir un orden con cierta capacidad evolutiva, ha de combinar equilibradamente redundancia (disposición de ciertas constricciones que definan su arquitectura como sistema) y variedad (la pluralidad y diversidad de elementos e interrelaciones entre ellos) (Atlan, 1979, pp. 44 y ss., y 73 y ss.). La variedad está representada en el caso de los sistemas económicos esencialmente por el dinero y la competencia mercantil, en la medida en que el primero es un medio generalizado de pago que con su circulación reconstituye continuamente la apertura de sus múltiples posibilidades de utilización, y la segunda representa la estructuración de la incertidumbre y el riesgo generados por el funcionamiento de una compleja economía monetariamente integrada. La redundancia, en cambio, se articula básicamente a través de las organizaciones productivas (empresas), en cuanto que éstas --mediante la jerarquización, la programación y la configuración de su personal y sus dispositivos tecnológicos, entre otras cosas-- generan rutinas operativas y limitaciones estratégicas que reducen las posibilidades que ofrece el mercado de obtener y gastar dinero. Es decir, dinero y mercado competitivo representan para un sistema económico la indeterminación e incertidumbre, mientras que la organización (empresarial) representa la evitación de (o la preparación para) las sorpresas y la inseguridad.

En este sentido, cuanto más concentrada esté la estructura empresarial de un área, menor sea la flexibilidad interna de las grandes empresas sobre las que se articule y más escaso o nulo el grado de exposición a la competencia mercantil, tanto más redundante e inflexible será la disposición de su entramado económico, que girará en torno a la rigidez de unas grandes empresas capaces de imponer sus estilos operativos, imágenes y valores (esencialmente "seguridad" frente a "riesgo") al conjunto de la estructura empresarial y al medio económico del área en general, ya que "las grandes organizaciones de este tipo pueden remitirse a las peculiaridades de su tecnología productiva y a sus standard operational procedures, a su capital ya invertido, a la concurrència internacional y también, y cada vez más, a la corporate identity o la organizational culture. Su misma rigidez les asegura el éxito frente a otras organizaciones más elásticas y a los entornos, pudiendo imponerse (...) a pesar de que ello sea a costa del desaprovechamiento de posibilidades" (Luhmann, 1987, pp. 46-47).

El resultado de todo ello es un sistema empresarial y económico fuertemente redundante y complicado, pero no complejo, pues carece de la necesaria indeterminación o variedad para poder resistir las perturbaciones ambientales y cambiar sus estructuras, y en el que la protección y asistencia estatales han venido a reforzar los efectos que

tiene la concentración de los recursos materiales e inmateriales de un territorio en unas pocas y grandes empresas: "la tendencia natural a debilitar la oferta de aquella iniciativa individual que es, a la larga, el elemento más importante de la riqueza nacional" (Marsahll, 1927, p. 284).

### 1.3. La regulación política del declive

La perspectiva de la "regulación política" del declive reúne aportaciones tanto de la ciencia política como de la sociología. El núcleo de su interés lo constituye lo que podríamos llamar el proceso político del declive; es decir, la fijación y selección de acciones públicas en el enfrentamiento de las situaciones de declive, y la forma en que los diferentes grupos de intereses privados intervienen o participan en la fijación y la ejecución de tales acciones.

Las acciones de respuesta al declive pueden orientarse hacia dos tipos de objetivos: bien a administrar el declive, en el sentido de gestionar de la forma menos costosa posible la reducción o el redimensionamiento de una actividad económica, de un conjunto de empresas o de una empresa, cuyo declive se considera irreversible; o bien a la "inversión" del declive, entendiendo por tal las acciones de tipo ofensivo, que buscan dinamizar los recursos endógenos o atraer recursos exógenos para la reactivación económica de la región. Ambos tipos no son excluyentes, ya que un mismo actor, tanto público como privado, puede recurrir a ellas en momentos, contextos y combinaciones diferentes.

La perspectiva de la administración del declive cuenta con un considerable volumen de información proporcionado por una literatura ya abundante sobre la reestructuración de sectores industriales en crisis, literatura de la que se puede encontrar una amplia referencia en Fichierri (1986) y en Dyson y Wilks (1986). En su gran mayoría, suele tratarse de estudios de casos de sectores o ramas de actividad, mientras que escasean los análisis comparativos y de base territorial que permitan obtener resultados más generalizables. Aún con esa dificultad, una convicción se afirma como el resultado más generalizable de esos estudios: que una situación de declive requiere la movilización de una gran cantidad de recursos, tanto materiales como inmateriales, difícil de conseguir sin formas de cooperación entre los diversos actores públicos y privados.

Desde una perspectiva más teórica, la difusión y el interés por el tema del neocorporatismo a niveles territoriales intermedios --tema del cual hay valiosas aportaciones en la sociología española (ver Pérez Díaz 1985, y Solé 1988)-- ha contribuido a comprender mejor el creciente papel de las organizaciones de intereses (sindicatos y asociaciones empresariales, principalmente) en la formación de las políticas industriales. La difusión de la perspectiva neocorporatista ha contribuido a que se generalice la convicción teórica, apoyada en algunos casos bien estudiados, de que la gestión tripartita (con la participación de administraciones públicas, empresas y organizaciones de trabajadores) y cooperativa de los procesos de declive es más eficaz. Esa es, sin embargo, una convicción que requiere algunos matices: en primer lugar, porque la gestión neocorporatista no es una alternativa disponible para cualquier situación, ya que requiere una dosis de recursos institucionales y culturales que sólo la herencia histórica de algunos territorios puede proporcionar; en segundo lugar, porque hay también muchos casos de gestiones exitosas que no han seguido esa vía, particularmente visibles en Francia, Gran Bretaña y USA (cfr. Pichierri, 1986, y Dyson y Wilks, 1986); y, finalmente, porque en algunos contextos --y en el caso de Asturias tenemos un ejemplo de ello-- la cooperación tripartita es una fórmula hacia la que están muy predispuestos los actores principales, pero puede tomar forma puramente simbólicas y con efectos perversos.

Algunos otros aspectos del proceso político pueden resultar relevantes para la eficaz gestión del declive. Dyson y Wilks (1986) han señalado los siguientes: la disposición y la capacidad de anticipar la crisis y "organizar" su recuperación, algo que depende de la disponibilidad de una serie de recursos culturales e institucionales que faciliten el diagnóstico temprano y la colaboración entre actores; el grado de "politización" de la gestión de la crisis, en el sentido de que una situación en la que el diagnóstico y los objetivos son fijados sobre la base de un acuerdo general en los criterios técnicos reforzará la legitimidad de la reestructuración y la consiguiente redistribución de recursos; y, finalmente, la extensión de la socialización de los costes de la reestructuración.

Disponemos de menos referencias teóricas que nos permitan comprender el proceso político de las acciones de "inversión" del declive. Las que disponemos coinciden en señalar, de nuevo, que la movilización de los recursos necesarios para la promoción económica de un territorio hace imprescindible cierta cooperación entre los grandes actores colectivos. De todos modos, esta cooperación no suele ser problemática cuando se trata de poner en juego recursos públicos --puesto que toda acción en favor de la promoción

económica tiene un margen de confianza previo en las RID-- , o actúa disponiendo o captando recursos "nuevos", respecto a los cuales el problema de la eficiencia asignativa (la evaluación de lo que supondría su uso para otros objetivos) apenas es visible para actores colectivos. Más problemática resulta la eficacia de esas acciones. En este sentido, hay una hecho que resulta casi general en las RID: estas políticas suelen lograr captar y disponer con éxito de aquellos recursos que parecen más materiales (capitales, mano de obra y tecnologías, principalmente), pero apenas logran promover aquellos recursos inmateriales de los que más carecen las RID ("empresarialidad", sobre todo, pero también un recurso asociados a ese como es el saber técnico y directivo de alto nivel).

El relativo fracaso de las políticas regionales de inversión del declive puede atribuirse a algunos aspectos del proceso de formación y gestión de las políticas regionales que sí nos resultan conocidos. Por un lado, su diseño general puede estar condicionado por el principio que vincula cualquier estímulo a la innovación empresarial con la eliminación de obstáculos a la competencia, cuando, como ha señalado Sabel (1988), en contextos en declive puede resultar tanto o más conveniente la acción de estimular la cooperación entre empresas buscando una orientación especializada de las "viejas" ramas industriales. En segundo lugar, quizá podría hablarse de un "ciclo de vida" de las políticas regionales (cfr. Saenz de Buruaga, 1988), de manera que éstas en su etapa "joven" se diseñan bajo la forma de racionalidad "paramétrica" --enfrentar un problema con mayores dosis del tipo de acciones que están siendo generalmente aplicadas en algunos territorios considerados paradigmas del dinamismo económico-- y sólo en fases más "adultas" son capaces de actuar bajo el principio de racionalidad "estratégica" --seleccionando objetivos y enfrentando los problemas de armonización y coordinación con otros agentes. Por último, una limitación de la eficacia puede provenir del carácter territorialmente limitado de un actor regional: algunos estudios realizados bajo la perspectiva del network analysis --Fichierri (1988b pp. 17s.) cita alguno de ellos-- muestran que la eficacia de un actor de la política industrial está en función de su capacidad para moverse, con entradas y salidas imprevistas, entre diferentes escenarios relevantes (en el caso que nos ocupa pueden suponer moverse en los niveles local, regional, nacional y comunitario).

En resumen, creemos que las tres perspectivas teóricas analizadas hacen aportaciones virtualmente relevantes para el estudio del declive industrial, particularmente en relación a los tres aspectos siguientes:

a) En qué grado las principales coaliciones de intereses económicos adquieren configuraciones que les orientan preferentemente hacia objetivos redistributivos.

b) El papel que juegan los componentes de la subcultura regional o local en la formación de identidades colectivas "ofensivas" o "defensivas".

c) La capacidad para diseñar políticas públicas de respuesta al declive y el papel de las organizaciones de intereses en ese proceso.

Un análisis basado en los comportamientos de los actores económicos principales --como el que intentamos para el caso de Asturias-- puede enriquecerse con estas aportaciones en cuanto ayude a comprender las configuraciones y las estrategias básicas de esos actores y su capacidad para responder con éxito a la exigencias, por una parte, de "gestión política" de las actividades en declive y, por otra parte, a la formación de políticas de "reversión" del declive. Previamente vamos a recoger algunos datos elementales sobre el proceso de declive económico de la región.

## 2. EL DECLIVE ECONOMICO DE ASTURIAS: ALGUNOS DATOS ELEMENTALES

El proceso de industrialización de Asturias, que en su desarrolló más importante tiene lugar en diferentes oleadas entre mediados del siglo hasta XIX y el inicio de los años setenta, ha estado caracterizado por cuatro rasgos de singular significación para comprender los problemas que la sociedad asturiana enfrenta en el presente:

a) Una fuerte concentración en torno a las denominadas "industrias de cabecera" (carbón y siderrugia, sobre todo), insuficientemente complementadas por el desarrollo de la industria ligera de transformación.

b) Un gran protagonismo de empresariado exógeno, procedente no sólo de otras zonas del país sino también de otros países.

c) Una dependencia casi constante en las mencionadas industrias de la protección y ayudas estatales, que tiene su culminación en la nacionalización de la mayor parte de la minería de hulla asturiana en torno a 1970 y la integración definitiva en Ensidesa

de la siderurgia privada asturiana en 1973. De esta manera la Administración Central, a través de la propiedad de la empresa pública, acabó convirtiéndose en el principal agente empresarial de la región. El INI proporcionaba en 1980 el 35,5% del empleo industrial y el 14,5% del empleo total, generando sus empresas el 39,5% del VAB industrial y el 19,5% del VAB total asturianos.

d) Los problemas de "modernización" social que han acompañado al proceso de industrialización, que se pueden resumir en estos dos hechos: por un lado, la permanencia de la mayor parte del territorio regional en una economía de base exclusivamente agraria y profundamente desarticulada de los grandes núcleos centrales urbanos de la región; por otro lado, el débil desarrollo de infraestructuras y equipamientos colectivos, en el que se refleja esa escasa integración de las actividades y del territorio regionales.

Como resultado de ese proceso la región ha ido configurando una peculiar estructura socioeconómica, caracterizada globalmente por marcados desequilibrios internos, con componentes tanto espaciales como sectoriales. El origen de esos desequilibrios está, fundamentalmente, en la polarización y especialización de la actividad económica, que genera, a su vez, unas características relaciones interindustriales en la región, en las que el sector público tiene un peso decisivo frente a una iniciativa privada muy debilitada tras su abandono de las actividades industriales estratégicas en la región en los años sesenta y principio de los setenta.

Los desequilibrios espaciales más acusados se articulan sobre la base de una diferencia entre el "centro" y la "periferia" de la región, términos que no sólo tienen una referencia puramente geográfica sino también demográfica y económica. Los tres municipios de Avilés, Gijón y Oviedo (principales núcleos urbanos de la región) han pasado de acoger en 1950 a un 27% de la población regional a un 48 % en 1986. Si a esos núcleos se añaden los quince municipios que los circundan y configuran la zona central de la región, las cifras para los años referidos pasan de un 53% a un 72%. Como consecuencia de ello el índice de Gini referido a la concentración de la población regional arrojaba en 1983 un valor de 0,67 (frente a un 0,37 en 1900). El éxodo rural que ha experimentado la región ha motivado, por otra parte, un envejecimiento de la población rural que se traducía en 1981 en un índice de envejecimiento (razón entre la población de 65 y más años y la de menos de 15 años) de 0,96, frente a un 0,58 en el conjunto de la región. Sin embargo, ello no impide que Asturias sea la región española que, entre las industrializadas, alcance los niveles más altos de población

activa agraria: en 1986 un 1% del empleo regional era agrario.

Por lo que se refiere a los desequilibrios sectoriales, lo más característico de la estructura industrial asturiana es su fuerte polarización en torno a las actividades mineras y siderometalúrgicas, que tiene su reflejo en que entre ambas generaran en 1980 cerca del 21% del empleo y el 43% del VAB regionales. Debe añadirse a esto la profunda disparidad de estructuras empresariales, como se advierte de inmediato en las diferencias en el tamaño de las empresas: frente a un tamaño medio de 24 asalariados en 1980 las factorías industriales de la región, en la rama de industrias extractivas la media era de 166 y en las industrias metálicas básicas de 1.917. En esas cifras se refleja el efecto de la presencia de las dos grandes empresas públicas (Hunosa y Ensidesa) localizadas, respectivamente, en cada una de esas ramas de actividad. Una estructura industrial, en suma, que configura una economía regional fuertemente dependiente de la producción minera y siderúrgica, a su vez muy concentrada espacial y empresarialmente y con una presencia determinante de la propiedad pública.

Más relevante que ese cuadro descriptivo de la estructura industrial, es la dinámica económica que conlleva, caracterizada por dos rasgos muy significativos:

a) Un escaso grado de integración entre las grandes industrias regionales de cabecera en mano pública y el resto de la pequeña y mediana industria privada. Las actividades de ambas parecen discurrir por dos circuitos económicos bastante diferenciados: el de la gran industria localizada en la región, especialmente orientado hacia y dependiente --en sus decisiones-- del exterior, y el de la pequeña y mediana industria regional, escasamente abierta hacia los mercados nacionales e internacionales.

b) Una muy limitada capacidad para generar nuevas actividades e iniciativas económicas; capacidad limitada incluso si se compara con otras regiones declinantes, como muestra el hecho de que la mayor parte de las inversiones realizadas en los últimos años se hayan dedicado a la racionalización y reestructuración de las industrias ya existentes (cfr. Ojeda y Vázquez, pp. 141ss.).

El declive de las actividades industriales estratégicas, dada la situación descrita, ha supuesto el declive general de la región. Algo que puede comprobarse recurriendo a algunos indicadores económicos básicos y su comportamiento comparado con otras regiones (cfr. Ojeda y

Vázquez 1988, y Cuadrado 1988): el VAB regional representaba el 3,9% del total nacional en 1955, el 3,3% en 1973 y sólo el 2,8% en 1985; el PIB per capita ha seguido un similar camino, que ha llevado a la provincia del octavo lugar en 1955 en el conjunto nacional al decimosegundo en 1973 y al vigésimosegundo en 1985; o, finalmente, la evolución del PIB regional, que (en pesetas constantes) creció entre 1960 y 1973 con un porcentaje anual acumulativo del 6,20 (frente a un 7,40 en el conjunto de España), y a un 1,05 entre 1973 y 1985 (frente a un 2,91 en el conjunto de España). El comportamiento económico de la región ha sido aún más negativo, en comparación con el resto de las regiones españolas, en los últimos años: las estimaciones más recientes muestran que Asturias es la región de todo el país con un menor crecimiento del PIB entre 1986 y 1988, con ritmos de crecimiento que se distancian progresivamente de la media nacional e incluso del resto de las RID (en 1988 el PIB creció un 3,6 en Asturias, frente a un 5,4 en España, un 4,5 en el País Vasco y un 5,7 en Cantabria), constituyéndose en la región que resulta menos capaz de beneficiarse de la reactivación económica iniciada en este período.

Las consecuencias sociales de esta declinante dinámica económica han comenzado a percibirse con una secuencia temporal según la cual los síntomas de declive demográfico se anticipan y la región tiene saldos migratorios negativos ya en los años sesenta, envejecimiento creciente y sensiblemente superior al conjunto nacional también desde esas fechas, y estancamiento demográfico y crecimiento vegetativo negativo con el discurrir de los años ochenta (Cuadros 1 y 2 del Anexo Estadístico); con algo más de retraso aparecen los problemas de empleo, especialmente graves para la incorporación de jóvenes y mujeres durante todos los años ochenta, y con tasas generales de paro ya superiores a las medias nacionales desde 1987 (Cuadros 3 y 4 del Anexo); y con mucho más retraso y en menor medida --por razones que más adelante comentaremos-- en reducciones relativas del bienestar como indica claramente la evolución de la renta familiar disponible (Cuadro 5 de Anexo).

### 3. LOS ACTORES: PAPELES, ESTRATEGIAS Y RELACIONES

Si partimos del criterio de que pueden ser considerados como actores relevantes para el estudio del declive de un área industrial aquellos que "pueden influir sobre las características y prestaciones de la estructura industrial del área" (Pichierri, 1988b, pp. 33s.), y aplicamos este criterio al caso de Asturias, podremos decir que los actores colectivos relevantes en la vida económica y

política regional son esencialmente cinco: la Administración central (en cuanto titular y responsable de las grandes empresas públicas localizadas en Asturias), la Administración autónoma, los partidos políticos, los sindicatos y los empresarios. Nos ocuparemos de analizar los papeles y estrategias de estos actores y el tipo de relaciones que les unen.

### 3.1. Papeles y estrategias

La Administración central: El papel desempeñado por este actor institucional con respecto a Asturias desde que el declive regional es percibido y asumido como una realidad incontestable --es decir, desde mediados de los setenta--, hay que entenderlo en una doble referencia: por un lado, en el contexto de lo que ha sido la política económica de la "transición" (que podría identificarse con el período 1975-1983), marcada por un incremento espectacular del gasto público (pasa en dicho período del 25 al 38% del PIB), que "se orientó no hacia la inversión pública (que descendió del 9 al 5,3 % entre 1973 y 1982) sino hacia las transferencias de renta (subsidios, pensiones, seguridad social, etc.), subvención a empresas en pérdidas (sobre todo empresas públicas) y otros gastos consuntivos" (Pérez Díaz, 1985, p. 66); y por otro lado, en un contexto en el que la política de reconversión industrial se diseña "sobre un modelo de gasto público: intentando negociar despidos con colectivos laborales especialmente resistentes a ello, por la doble razón de pertenecer a empresas públicas y de estar localizados en regiones donde su resistencia podía inducir una crisis política, tales como el País Vasco, Asturias y Galicia" (ibid., p.67). Esta actuación sólo se vio modificada significativamente con la Administración socialista, que, al menos en relación a la industria siderúrgica y naval, apostó con mayor decisión (pero desigual fortuna) por la reestructuración, mientras que respecto a la minería intentó una política de mínimo redimensionamiento y reducción de costes. En ninguno de los casos de sectores en declive con presencia en la región se optó por una política reconvertora en sentido estricto, que hubiera pasado lógicamente por una diversificación de actividades, contradictoria con el enfoque esencialmente "racionalizador" de la política industrial adoptada por el gobierno socialista.

La Administración autónoma: La creación de la Administración autónoma asturiana, así como su desenvolvimiento hasta el presente, ha venido marcada por dos rasgos principales: de una parte, por la existencia de una escasa y difusa

conciencia diferencial, incapaz de generar una decidida voluntad de autogobierno, como se demuestra, entre otras cosas, por el acceso a la autonomía a través de la vía "marginal" del artículo 151 de la Constitución, la ausencia de fuerzas regionalistas o nacionalistas mínimamente relevantes y la resistencia del partido en el gobierno a ampliar significativamente las competencias autonómicas; y de otra parte, por la permanente pretensión de la clase política central de convertir a sus representaciones asturianas en meros apéndices electorales. Si a todo ello añadimos las fuertes limitaciones operativas impuestas por el "tamaño" de la comunidad autónoma para alcanzar aquellos umbrales a partir de los cuales las políticas de desarrollo y reindustrialización pueden ser más eficaces, podemos entender mejor la indecisión e inoperancia de un agente con pocas competencias y graves límites operativos, atenuado además entre su fuerte dependencia de la administración y clase política centrales y unos apoyos autóctonos esencialmente localizados en las zonas y actividades más declinantes.

Los partidos políticos: La dinámica política asturiana desde la puesta en marcha del sistema democrático ha estado claramente marcada por la hegemonía de la izquierda clásica, y en especial del socialismo (Cuadro 6 del Anexo). Como se ha señalado en el punto anterior, esta hegemonía se ha asentado sobre el decisivo apoyo electoral y operativo de las fuerzas sociales justamente más amenazadas por el declive industrial, esencialmente organizadas a través de los sindicatos, los cuales no sólo han sido poderosos agentes electorales, sino también, junto a funcionarios y cuadros de las grandes empresas públicas, su principal "cantera" de afiliados y cuadros políticos.

Los sindicatos: Su principal base de afiliación y, sobre todo, de recursos operativos proviene de la minería y la siderurgia públicas. La afiliación sindical de las dos grandes empresas públicas es bien ilustrativa: en 1985, Hunosa, con una tasa global de afiliación sindical del 88%, aportaba a UGT el 22% de sus afiliados en Asturias, y a CC00 el 27%; Ensidesa, por su parte, con una tasa global de afiliación sindical del 64,5%, aportaba a UGT otro 14,5% de sus afiliados regionales, y a CC00 un 16,5%; es decir, entre Hunosa y Ensidesa UGT reclutaba en dicho año el 36,5% de sus afiliados en Asturias, mientras CC00 obtenía un 43,5%, que generan, singularmente en el caso de la minería, aquellas características socio-estructurales de vida laboral y social más aptas para el desarrollo de poderosas organizaciones sindicales --especialmente, una fuerte homogeneidad ocupacional que sirve de base a una elevada segregación ecológica que refuerza, por la vía de la "sociabilidad", las

bases "instrumentales" del sindicalismo, como señala Streeck (1979).

Teniendo esto en cuenta, es fácil entender por qué, incluso cuando el declive era más que notorio, los sindicatos se han mantenido anclados al tradicional modelo de desarrollo regional, resistiéndose a toda política de redimensionamiento de las actividades declinantes. Obviamente, con ello pretendían defender los intereses de su principal base de representación. En este sentido, los sindicatos han sido el auténtico núcleo del frente común regional que repetidamente se ha opuesto al "enemigo exterior" (fundamentalmente la Administración central, pero a veces incluso empresas y trabajadores de otras regiones) que pretendía "desmantelar" las empresas declinantes de la región.

Los empresarios: La ausencia de un empresariado privado con poder económico y articulación asociativa suficientes como para desempeñar, como actor colectivo, un papel significativo resta relevancia a su actuación. En su debilidad ha tenido que ver, sin duda, la salida del escenario económico regional de importantes grupos financiero-industriales que habían jugado un significativo papel en el pasado industrial y que tenían una fuerte base regional. Por otra parte, las grandes empresas públicas, apenas han servido como "vivero" de nuevos empresarios, y no parece que el nutrido grupo de los técnicos y altos directivos de estas empresas haya aportado algún efectivo al escaso "nuevo empresariado" de la región. Con esas dos referencias es fácil comprender que la integración asociativa del empresariado sea muy débil, con una nula vinculación a ella de la gran empresa pública y de los grandes grupos privados que aún operan en la región y con un papel de liderazgo de empresarios en actividades (como la construcción y el transporte) en las que la acción colectiva en la esfera regional toma la vía de presión en defensa de intereses de grupos de empresas más que de una intervención general en la formación de políticas regionales. Algunos otros grupos de "nuevos empresarios" regionales, surgidos principalmente en actividades de servicios y en algunas otras actividades (industrias agroalimentarias, por ejemplo) en las que se aprecia un cierto dinamismo económico en la región, que no están o vinculados a la órbita de las grandes empresas ni son pertenecientes a los "viejos" grupos financieros, aún no tienen el peso económico ni la identidad simbólica que les capacitaría para jugar un papel de liderazgo en la organización y promoción de los intereses del conjunto del empresariado regional.

### 3.2. Relaciones y vínculos entre los actores

A través de la trama de intereses, estrategias y orientaciones señalada, estos actores se han interrelacionado dando lugar a una dinámica socio-económica en la que, por una lado, los efectos sociales del declive se han aliviado por la vía de las transferencias de rentas, y, por otro lado, la subcultura industrial ha tomado una configuración acusadamente "defensiva".

La región ha disfrutado de unos niveles descendentes de bienestar que, sin embargo, no han caído hasta el punto que era de esperar dadas la estructura y el potencial productivos de la región. Si no ha sido así, es en buena medida gracias al estancamiento demográfico y al apoyo de la Administración central, quien ha asumido una buena parte de los costes del declive económico regional por la vía de la transferencia de rentas y de las subvenciones a las empresas públicas con déficits de explotación. Las transferencias de renta aportaron en 1985 un 27,3% de la renta familiar disponible bruta --frente a un 16% en 1979--, mientras que tales transferencias representaban en el conjunto del país un 21% en 1985 y un 13% en 1979. Las subvenciones a las empresas con déficits de explotación ascendieron en 1985 a más de 52.000 millones de pesetas, representando un 18,3% de los gastos corrientes de la administración central en Asturias y un 17,2% de su gasto total. Estas cifras son mucho más significativas si se tiene en cuenta que el gasto total de la Administración autónoma en 1985 ascendió a algo más de 60.000 millones de pesetas; es decir, poco más de la cantidad destinada por la administración central a subvencionar las empresas públicas radicadas en Asturias y que tuvieron déficits de explotación.

El carácter territorialmente localizado y ocupacionalmente especial de los intereses representados en sindicatos y partidos políticos de izquierda configura a ambos, en cuanto principales portadores y portavoces de los intereses regionales más poderosos, como impulsores de una dinámica colectiva más "redistributiva" que orientada hacia la eficiencia colectiva. Es decir, el carácter político y sindicalmente estratégico de las actividades declinantes hace que las organizaciones que moldean institucionalmente la vida económica y política regional, con su defensa de dichas actividades, contribuyan a la reducción de la eficiencia e ingresos agregados regionales, en perjuicio de aquellos sectores sociales menos capaces de una organización y acción colectiva y que, hoy por hoy, difícilmente suponen una posible base social de solidez comparable a la representada por los colectivos de las grandes empresas declinantes.

Esta presión para sostener actividades ineficientes, al retrasar o evitar la reasignación de los recursos hacia otras actividades en las que podrían ser más productivos, se configura como una barrera a la entrada de nuevas actividades que reduce el nivel de crecimiento regional en una magnitud considerable. Entre 1979 y 1985, según datos del Banco de Bilbao, mientras el renta nacional había crecido en precios constantes un 8,1%, con una tasa anual del 1,3%, la renta regional asturiana creció sólo un 2,5%, con una tasa anual del 0,4%. En lo que se refiere a la productividad, medida en su valor aparente por empleo en la industria, y durante el periodo de referencia, frente a un crecimiento medio en el conjunto del país del 23%, en Asturias lo hizo sólo en un 13,3%.

Tales barreras de acceso sólo pueden ser levantadas sobre la base de importantes barreras de salida de las actividades declinantes, como son los altos salarios<sup>1</sup>, una elevada estabilidad en el empleo, una estrategia "monorentista" de las familias (apoyada en estos empleos seguros y bien remunerados) y cualificaciones en muchos casos difícil o muy costosamente transferibles.

La subcultura industrial y política, aunque girando alrededor del declive, sin embargo dificulta, cuando no impiden, su efectivo afrontamiento. En efecto, la subcultura industrial está firmemente vinculada a una especie de añoranza de los paraísos (léase pujanza y bienestar) perdidos, en muchas ocasiones con fuertes tintes "necrófilos", que se complementa con un desplazamiento hacia el exterior de las responsabilidades por el declive, interpretado unas veces en claves morales ("no se nos

(1) Un dato tiene especial significado: en 1985 los costes laborales por asalariado en el sector industrial asturiano eran de 1.643.000 ptas. y de 1.823.000 ptas. en el sector servicios, frente a 2.406.000 en la rama de producciones energéticas y de 2.185.000 en la siderometalurgia, donde están implantadas las grandes empresas públicas de la región (Banco de Bilbao, 1988). Ahora bien, la magnitud de los costes laborales de la empresa pública en Asturias, pese a ser superior al de empresas similares del sector privado y a la media del sector público industrial, no es algo en sí mismo negativo, sino, como señala Cuervo (1984), esencialmente en relación a dos cuestiones conexas: la distorsión que los niveles salariales de la empresa pública genera sobre su entorno empresarial más próximo, como resultado del "efecto demostración", y la falta de relación existente entre la evolución de los costes laborales y la de los niveles de productividad, -- que encuentra su más clara manifestación en Hunosa, donde los costes laborales representan, según los últimos datos disponibles, en torno al 70% de los costes totales y un 130% de la facturación, elevada estabilidad en el empleo.

reconoce lo mucho que hemos significado históricamente ni lo mucho que hemos dado en otras épocas"), y otras en claves supuestamente económicas o de defensa del "interés nacional" ("se abandonan sectores públicos "estratégicos" como el carbón o el acero en beneficio de intereses privados o por políticas industriales tecnocráticas").

El correlato político de tal subcultura es fácil de entrever: la Administración central y su actuación en o para Asturias se convierten en el eje de la opinión pública y de la vida política regionales --que se debaten ante este tema con ayuda de una compleja dialéctica "sucursalismo/reivindicacionismo"--, configurando el caldo de cultivo ideal para la forja frecuente de frentes comunes regionales, a los que no es difícil sumar otras fuerzas subalternas para reclamar "solidariamente" el apoyo de "Madrid" o recordarle sus deudas "morales" con Asturias.

#### 4. LAS RESPUESTAS AL DECLIVE

Las posibles respuestas a un proceso de declive en marcha pueden articularse, como ya señalamos, en dos grandes líneas de actuación: su administración (la gestión destinada a reducir los costes de la contracción y el redimensionamiento considerados irreversibles) y su inversión (la actuación "ofensiva" destinada a generar iniciativas endógenas o captar recursos exógenos que permitan la reactivación o reindustrialización de la región).

En lo referente a la administración del declive, es preciso tener muy en cuenta que una condición necesaria para su puesta en marcha --y así evitar la acumulación autoalimentadora del declive--, es el reconocimiento por los actores implicados de la inevitabilidad de un proceso de redimensionamiento. En el caso de Asturias, el actor clave para la constatación y gestión del declive es la Administración central, y ello por una doble razón: en primer lugar porque, como señala Pichierri (1988a, p. 47), "en el caso de crisis que afecten a grandes corporaciones o a grupos de empresas la intervención pública es casi inevitable", y en segundo lugar, porque en nuestro caso, además, es el propietario de las principales empresas implicadas en la crisis.

Este doble carácter de agente político --y en cuanto tal interesado en ver la forma de afrontar y distribuir los costes sociales y políticos que el redimensionamiento conlleva-- y económico --interesado en la racionalización empresarial de las actividades en crisis--,

ha hecho que la gestión del declive asturiano por parte de la Administración central se haya visto sometida a ciertas contradicciones. Así, mientras en el caso de la siderurgia su apuesta por un considerable redimensionamiento y una renovación tecnológica y organizativa que mejorara drásticamente la competitividad ha sido decidida, en el caso de la minería su actuación ha tenido y tiene perfiles mucho más difuminados e indecisos. A ello, indudablemente, han contribuido tres cosas. En primer lugar, que en el caso de la siderurgia, y ante la perspectiva de la integración en la CE --dada la competencia y el poder de la Comisión de la CEE para proceder a la racionalización del sector--, el margen de maniobra era escaso, mientras que en el caso de la minería, en cambio, la presión supranacional para la racionalización económica es más difusa, y la peculiar y difícilmente reversible situación de las zonas mineras -- además muy poderosamente articuladas política y sindicalmente-- hacia en este caso pesar más los aspectos políticos y sociales. En segundo lugar, que el grado de deterioro (y por tanto la dificultad de renovación) de la organización empresarial es claramente diferente en un caso y otro (mucho mayor en el caso de Hunosa). Y en tercer lugar, que la actitud de los sindicatos ha sido muy diferente, pues mientras en la siderurgia los sindicatos han llegado a asumir la necesidad del redimensionamiento y se han comprometido con una mínima voluntad cooperativa con la gestión del mismo, en el caso de la minería (por lo apuntado más arriba) su actitud ha sido y en más bien de resistencia, sobre todo en el caso de CCOO, lo que acentúa decisivamente para la Administración central la relevancia de los costes sociales y políticos de toda medida racionalizadora. Estas tres razones creemos que permiten entender bien por qué Ensidesa parece haber afrontado exitosamente la administración de su declive, en claro contraste con la evolución crecientemente negativa de Hunosa (cfr. García Blanco y Gutiérrez, 1988).

Caso aparte es el de la otra actividad industrial de la región inmersa en un pronunciado declive: la construcción naval. En ella, la presencia directa del sector público, con ser importante, es menos significativa que en los hasta ahora considerados. Además, la estructura empresarial es claramente diferente, pues está articulada sobre empresas de tamaño medio. Las características del proceso de declive de la construcción naval asturiana, por otra parte, no se apartan mucho de las mostradas por el sector a nivel internacional; es decir, la creciente dificultad para competir en precios (costes) en unos mercados crecientemente estandarizados y penetrados por los países de reciente industrialización (cfr. Heseler y Kröger, 1984, cap. 2). Dada esta situación, y en el contexto de la política de reestructuración emprendida por la Administración central a nivel nacional, la fuerte concentración de los astilleros asturianos en la bahía de

Gijón ha convertido el proceso de administración del declive en un fenómeno de amplia resonancia local. El dato quizá más característico, desde un punto de vista sociológico, ha sido la determinada oposición a la reestructuración planeada por la Administración por parte de todos los sindicatos a excepción de UGT, que adoptó una estrategia de colaboración desde la llegada del Partido Socialista al poder en Madrid. Esta actitud de resistencia frontal, además, se ha revestido de tonos extramadamente violentos ante la significativa presencia de fracciones sindicales de implantación local y orientación radicalizada, y ha generado una dinámica de confrontación y división que ha condicionado restrictivamente las estrategias gubernamentales y empresariales, resultando de todo ello una ralentización de las medidas reestructuradoras. Esta ralentización, unida a la ya de por sí tardía decisión de afrontar seriamente el declive por parte de la Administración central, es muy probable que haya generado un desajuste temporal de la operación reestructuradora, muy significativo para entender el fracaso aparente de la misma. En este sentido, la incapacidad de la nueva empresa surgida del proceso de reestructuración para lograr una cartera de pedidos que permita emplear a su redimensionada plantilla, con los consiguientes y recrudecidos conflictos, es una muestra del fracaso de la operación realizada.

Puede decirse, pues, que el proceso de administración del declive emprendido en Asturias ha tenido resultados bien dispares: positivos en lo que se refiere a la siderurgia y negativos en el caso de la minería (donde no ha pasado de implicar un leve redimensionamiento sin ninguna repercusión reestructuradora) y de la construcción naval (donde hubo un significativo redimensionamiento que, sin embargo, no ha sido complementado por una eficaz y eficiente reestructuración empresarial). En esta disparidad de resultados han tenido bastante que ver factores como la posición y papel contradictorios de la Administración central (agente político y empresarial a la vez), el grado de deterioro y significado socio-geográfico de las diferentes empresas afectadas, y las contradictorias y complejas estrategias de los sindicatos, que han dificultado la articulación a escala regional de un modelo cooperativo de administración del declive.

En lo referente a las actuaciones encaminadas no a la gestión o administración del declive sino a su inversión --es decir, las políticas de reactivación económica--, han tenido por norte, como parece lógico, una revitalización del tejido empresarial regional interpretada en clave "diversificadora". A tal efecto, salvo las medidas (más bien testimoniales) adoptadas por la Administración central en el terreno de la formación y reciclaje profesional a través del INEM y los Fondos de Promoción de Empleo para recolocación de trabajadores afectados por la reconversión, el grueso de

las iniciativas ha caído bajo la responsabilidad de la Administración autónoma. Esta ha puesto en funcionamiento o gestionado una serie de instrumentos de promoción y de apoyo a la actividad empresarial, cuyas características y resultados ya han sido suficientemente analizados (Arias y Vazquez, 1986; Lafuente y Pérez Simarro, 1988), por lo que nos limitamos a mencionar los más importantes.

El instrumento principal lo constituye el Instituto de Fomento Regional (organismo autónomo creado en 1983 y destinado a promover un "desarrollo equilibrado"), del que dependen dos sociedades operativas: la Sociedad Regional de Promoción (una sociedad anónima cuyo capital social está participado por la Administración autónoma, la Caja de Ahorros de Asturias y más de cien empresas, y que tiene por objeto la promoción de nuevas actividades, utilizando fórmulas de capital-riesgo para participar en las nuevas empresas) y la Sociedad Regional de Reconversión, destinada al asesoramiento técnico y financiero de empresas en procesos de ajuste. Otros instrumentos específicamente regionales son el FAUR (Programa de Actuaciones Urgentes) --convertido recientemente en el Servicio de Asesoramiento y Promoción Empresarial (SAYPE)-- orientado a fomentar el empleo y la actividad empresarial en el ámbito local y dirigido especialmente a la gestión de pequeños proyectos, y la FICYT (Fundación para el Fomento de la Investigación Científica y la Tecnología), una agencia que busca promover la colaboración entre centros de investigación y empresas.

Además la Administración autónoma ha gestionado otros instrumentos cuyo diseño y recursos provienen de la Administración central, como es el caso de la ZUR de Asturias, destinada a promover la inversión y la creación de empleo en zonas en las zonas afectadas por la reindustrialización. Tras la finalización del período de vigencia de la ZUR a principios de 1988 y la entrada vigor a mediados de ese año de la Ley de Incentivos Regionales, el nuevo tipo de incentivos regionales --concretamente los que se establecen en la nueva ley para para el área central minera calificada como Zona del tipo III o Zona Industrializada en Declive y para el resto de la región calificada como Zona del tipo II o Zona de Promoción Económica-- se canalizan a través de la Oficina de Incentivos Regionales dependiente del propio IFR. La propia Administración autónoma gestiona el CDTI, una agencia nacional que financia inversiones para nuevos productos y nuevas tecnologías.

A estas iniciativas se han sumado los denominados Planes de Desarrollo Regional, uno para ya finalizado para los años 1985-1988 y otro en vigor para el período 1989-1993, que, financiados por la CE y los gobiernos central y autónomo, pretenden desarrollar armonizadamente toda una serie de programas destinados a la renovación del

sistema productivo regional y a la creación de infraestructuras y equipamientos colectivos que mejoren la deficitaria situación de Asturias en este terreno.

En una dimensión territorial menor, la de las cuencas mineras, hay que añadir la creación de SODECO (Sociedad para el Desarrollo de las Comarcas Mineras), concebida como agencia de desarrollo local y de promoción empresarial, pero lastrada en su origen por su vinculación financiera a la mejora de los resultados de Hunosa.

Todo este amplio abanico de políticas de renovación regional, sin embargo, no ha sido capaz de generar una significativa revitalización de la vida económica e industrial de la región (cfr. Ojeda y Vázquez, 1988). Dejando a un lado las ineficacias que pueda generar lo abigarrado (y a veces hasta redundante y contradictorio) de estos instrumentos y sus posibles límites por causa de los "umbrales operativos", parece claro que hay una serie de razones claves para entender los escasos resultados logrados en el terreno de la reindustrialización:

a) El conjunto de las medidas destinadas a atraer recursos (materiales y no materiales) exógenos o evitar que los existentes en la región no la abandonen, no pueden lograr, a lo sumo, más que reducir las fuertes desventajas comparativas que en términos de localización industrial arrastra Asturias (cfr. Fernández 1988), teniendo en cuenta, además, que ello no significa sino entrar en una "carrera" en la que se encuentran compitiendo (en muchos casos con clara ventaja de partida y superiores gamas de incentivos) otras muchas regiones.

b) Que las políticas destinadas a promover nuevas actividades y a favorecer el dinamismo de pequeñas empresas se tropieza con el grave e insalvable problema de la escasez de "recursos empresariales" endógenos, resultado del pasado reciente de la región. En este sentido, además, las grandes empresas públicas regionales, pese a contar entre sus filas con técnicos y directivos con alto grado de cualificación y experiencia empresarial, se muestran incapaces de servir como una "cantera de empresarios". Al respecto, la orientación "cosmopolita" (Fichierri, 1988b) de los más dinámicos y emprendedores de entre tales técnicos y directivos, o bien la fuerte identificación con la actividad desempeñada entre los más "localistamente" orientados (Fichierri, 1988, pp.38 y 39), representan obstáculos decisivos para que de tales empresas surjan agentes innovadores de tipo "local", que como se ha visto en otros casos --véase la

referencia que hace Pichierri (1983b, p. 45) al papel que han jugado al respecto las grandes empresas en regiones como Lorena y Piamonte-- son la principal fuente de renovación empresarial e industrial de una región en declive.

c) El volumen de recursos materiales disponibles para la reactivación económica ha llegado a ser muy cuantioso. Ello refleja que la capacidad de la Administración regional para movilizar ese tipo de recursos y, sobre todo, para captar recursos en agencias públicas de fuera del territorio, nacionales y especialmente comunitarias, es mucho mayor que su capacidad para activar recursos endógenos.

## 5. ALGUNAS REFLEXIONES FINALES

Vamos a concluir este trabajo con unas reflexiones que, con la referencia de las aportaciones teóricas de las ciencias sociales que hemos considerado relevantes para la comprensión de las RID, nos permitan insistir sobre los rasgos más específicos del caso asturiano y situarlos en una perspectiva de consideración más general.

a) La escasa capacidad de los actores regionales relevantes para integrar esfuerzos de cara a reaccionar eficazmente ante el declive económico se fundamenta en la tendencia a repetir conductas que, en la historia reciente de Asturias, han servido para defender sus industrias básicas: el recurso a la Administración central para atenuar un proceso de decadencia empresarial. Una tendencia ya patente en los años sesenta, cuando el empresariado asturiano fue incapaz, en pleno "milagro económico" nacional, de desarrollar y renovar las principales industrias regionales, que hubieron de ser absorbidas finalmente por el INI, el cual se convirtió en el principal agente industrial de la región, pasando el empresariado privado a desempeñar un papel subalterno.

b) Esa estrategia defensiva se ve acompañada y reforzada por una cultura industrial y política que cabría tipificar como "fatalismo dependiente", que, a su vez, favorece una orientación "redistributiva" de los principales grupos de interés localizados en las actividades declinantes, que frena toda política de reasignación de recursos, indispensable para iniciar cualquier proceso de renovación económica endógena.

c) La debilidad del entramado asociativo empresarial asturiano, junto con la falta de una tradición cooperativa entre los principales actores regionales --entendida en términos de colaboración para la eficiencia colectiva y no en términos colusivos-- y de una conciencia diferencial que pudiera reforzar simbólicamente el valor de la concertación, han determinado, por un lado, la incapacidad de la Administración autónoma para convertirse en agente político integrador y, por otro lado, que las iniciativas regionales "solidarias" no hayan pasado de funcionar de manera puntual y motivadas por acciones u omisiones de la Administración central percibidas como agravios para la región. La incapacidad del gobierno autónomo para integrar los intereses regionales ha tenido efectos particularmente negativos en su relación con la Administración central al enfrentar la gestión de los sectores en declive; la incapacidad de aquel para actuar como representante a largo plazo ha impedido el intercambio político necesario entre gobierno regional y gobierno central.

d) Un diagnóstico tardío del declive, ralentizado además por las frecuentes reacciones de "frentes comunes regionales o locales" --generalmente liderados por los sindicatos--, ha hecho que sólo en el caso de la siderurgia las medidas reestructuradoras hayan tenido relativo éxito, y en gran medida debido a la presencia de un agente exógeno como la CEE, cuya Comisión había abordado decididamente el proceso de racionalización del sector y presionaba a la siderurgia española para la adopción de medidas similares a la tomadas en otros países.

e) Las estrategias de inversión del declive, descontando el hándicap de las desventajas comparativas de localización, han chocado con tres tipos de dificultades: por un lado, y principalmente, con el déficit crónico de "empresarialidad" endógena que hace que los instrumentos de promoción que actúan por la vía de "crear mejores condiciones" para la actividad empresarial apenas tengan resultados positivos; por otro lado, por la "juventud" de las políticas regionales, que las sitúa en una etapa en las que su orientación es más "paramétrica" que "estratégica"; y finalmente, por la filosofía esencialmente "reestructuradora" y no "reindustrializadora" que ha guiado la política industrial del sector público bajo el mandato socialista.

## BILBIOGRAFIA CITADA

Arias, Angel M. y Vázquez, Juan A. (1986), "Situación y perspectivas del sector industrial en Asturias", Información Comercial Española, nº 635, pp. 127-143.

Banco de Bilbao (1988), Benta nacional de España y su distribución: 1985 (Madrid: Banco de Bilbao).

Becattini, Giacomo (1987), "Introduzione" a Giacomo Becattini (ed.), Mercato e forze locali: il distretto industriale (Bologna: Il Mulino).

Cuervo, Alvaro (1984), La empresa pública en España (Oviedo: Universidad de Oviedo).

Cuadrado, Juan R. (1988), "Tendencias económico-regionales antes y después de la crisis en España", Papeles de Economía Española, nº 34, 1988, pp.17-61.

Doeringer, Peter B., Terkla, David G. y Topakian, Gregory C. (1987), Invisible Factors in Local Economic Development (Nueva York: Oxford University Press).

Dyson, Kenneth y Wilks, Stephen (1983), Industrial Crisis (Oxford: Martin Robertson).

Fernández, Víctor (1988) Determinantes de la localización de las empresas industriales en España (Madrid: Ministerio de Industria).

García Blanco, Jose M., y Gutiérrez, Rodolfo (1988), "El declive industrial en las cuencas mineras asturianas", Abaco, nº 4, pp. 51-62.

Heseler, Heiner y Kröger, Hans J. eds. (1984), "Stell Dir vor, die Werften gehören uns..."Krise des Schiffbau oder Krise der Politik (Hamburgo: VSA).

Hirschman, Albert (1970), Exit, Voice and Loyalty. Responses to Decline in Firms, Organizations and States (Cambridge, Mass: Harvard University Press).

Lafuente, Alberto y Pérez Simarro, Ramón (1988), "Balance y perspectivas de las ZUR", Papeles de Economía Española, nº 35, pp. 219-234.

Luhmann, Niklas (1984), Soziale Systeme (Frankfurt: Suhrkamp).

Marshall, Alfred (1927), Industry and Trade (3ª ed.) Londres: MacMillan.

Djeda, Germán y Vázquez Juan A. (1988), "La economía" en Historia de Asturias. Edad contemporánea III: El franquismo y la transición democrática (Salinas: Ayalga), pp. 91-143.

Olson, Mancur (1971), The Logic of Collective Action (Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press).

--- (1982), The Rise and Decline of Nations (New Haven, Connecticut: Yale University Press).

Parsons, Talcott (1973), "Culture and Social System Revisited", en L. Schneider y Ch. Bonjean (eds.), The Idea of Culture in the Social Sciences (Cambridge: Cambridge University Press).

Pérez Díaz, Víctor (1985), "Gobernabilidad y mesogobiernos: Autonomías regionales y neocorporatismo en España", Papeles de Economía Española, nº 21, pp. 41-76.

Pichierri, Angelo (1986), "Il declino industriale" en Angelo Pichierri (a cura di), Il declino industriali: Il contributo delle scienze sociali alla diagnosi e alla definizione di strategia di risposta (Torino: Rosenberg & Sellier), pp. 7-44.

--- (1988a), "Diagnóstico y estrategia en el declive de la industria siderúrgica europea", Abaco, nº 4, pp. 32-50.

--- (1988b), La gestione politica del declino industriale regionale. Uno studio comparativo su Genova e Brema (Torino: mimeografiado).

Quevit, Michel (1987), "Rapport general" en Mutations industrielles et changement culturel (Mons, Belgica: Régions Européennes de Tradition Industrielle, Troisième Conférence Internationale)

Sáenz de Buruaga, Gonzalo (1988), "Ayudas y política regional", Economía Industrial, nº 259, pp. 93-102.

Sabel, Charles (1986), The Second Industrial Divide: Possibilities for Prosperity (New Jersey: Basic Books).

--- (1988), "La flessibilità industriale in una prospettiva storico-comparativa: Alcuni esempi tedeschi e americani" en Marino Regini (a cura di), La sfida della flessibilità (Milan: Franco Angeli), pp. 41-54.

Solé, Carlota, comp. (1987), Corporatismo y diferenciación regional (Madrid: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social).

Steiner, Michael (1985), "Old Industrial Areas: a Theoretical Approach", Urban Studies, vol. 22, pp. 387-398.

Streeck, Wolfgang (1979), "Gewerkschaften als Mitgliederverbände. Probleme gewerkschaftlicher Mitgliederreklutierung" en J. Bergmann (ed.), Beiträge zur Soziologie der Gewerkschaften, (Frankfurt: Suhrkamp).

Trigilia, Carlo (1987), "Desarrollo de la pequeña empresa y subculturas políticas en Italia", Revista Española de Investigaciones Sociológicas, nº 38, pp. 93-117.

Cuadro 1  
EVOLUCION DE LA POBLACION EN ASTURIAS Y ESPAÑA  
(1940-1986)

	Asturias		España	
	Población	% incremento intercensal	Población	% incremento intercensal
1940	336.642	5,65	26.014.278	9,87
1950	668.642	6,15	28.117.873	8,08
1960	989.344	11,39	30.528.539	8,57
1970	1.045.635	5,69	33.956.047	11,22
1981	1.127.007	7,78	37.748.260	11,16
1986	1.114.115	-1,15	38.863.301	2,95

Fuente: INE, Censos de Población y Padrón Municipal de Habitantes 1986. Elaboración propia.

Cuadro 2  
MOVIMIENTO NATURAL DE LA POBLACION EN ASTURIAS  
(1977-1987)

	Nacidos vivos	Fallecidos	Crecimiento vegetativo
1977	17.307	9.937	7.370
1978	16.363	9.449	6.914
1979	15.369	9.251	5.707
1980	13.519	10.027	3.492
1981	13.604	9.854	3.750
1982	12.384	10.006	2.342
1983	11.797	10.089	1.798
1984	11.234	10.280	963
1985	10.681	10.834	-153
1986	10.271	10.535	-264
1987	9.449	10.613	-1.164

Fuente: INE. Tomado de SADEI, Datos y cifras de la economía asturiana 1987 y 1988.

Cuadro 3  
PARO REGISTRADO EN ASTURIAS Y ESPAÑA

	Asturias			España (en miles)		
	Dic. 1987	Dic. 1988	% 88/87	Dic. 1987	Dic. 1988	% 88/87
Paro total	86.249	82.492	-4,4	3.023,6	2.768,5	-8,4
Parados ≤ 24 años	35.694	32.699	-7,8	1.253,8	1.083,5	-13,6
Mujeres paradas	44.053	46.435	5,4	1.485,5	1.509,0	1,6
Parados en el sector servicios	25.162	25.967	3,2	976,1	969,1	-0,7
Parados sin empleo anterior	35.450	33.471	-5,6	889,4	772,7	-13,1

Fuente: Elaboración propia sobre datos del INEM

Cuadro 4  
PESO RELATIVO DE DIVERSOS COLECTIVOS DE PARADOS EN ASTURIAS  
Y ESPAÑA (Diciembre 1988)  
(En % sobre total de parados)

	Asturias	España
Mujeres	56,3	54,5
Jóvenes (≤ 24 años)	39,9	39,1
Adultos (> 55 años)	5,1	6,7
Sin empleo anterior	40,6	27,9

Fuente: Elaboración propia sobre datos del INEM

Cuadro 5  
**RENTA FAMILIAR DISPONIBLE POR HABITANTE EN LAS REGIONES  
 ESPAÑOLAS**

Comunidad	RENTA FAMILIAR DISPONIBLE POR HABITANTE (PESETAS)				
	1978	1979	1981	1982	1985
Andalucía .....	71.152	218.739	296.518	370.319	457.981
Aragón .....	90.411	289.790	371.344	476.942	608.482
Asturias .....	85.531	267.810	363.238	459.122	546.788
Baleares .....	177.854	341.646	473.854	649.131	769.191
Canarias .....	78.824	240.986	324.335	421.961	503.964
Cantabria .....	91.741	265.471	371.764	482.950	565.388
Castilla-La Mancha .....	72.827	229.109	283.409	357.834	480.289
Castilla-León .....	77.225	243.879	313.500	421.963	521.368
Cataluña .....	112.928	331.556	445.286	576.759	681.148
Extremadura .....	61.541	192.333	262.487	311.042	437.118
Galicia .....	72.017	247.378	318.448	403.961	488.220
Madrid .....	122.101	325.067	450.118	574.239	692.417
Murcia .....	77.061	240.489	311.157	400.902	513.741
Navarra .....	100.419	280.730	373.068	504.818	590.441
País Vasco .....	117.608	272.354	381.026	507.958	589.498
La Rioja .....	94.732	303.152	381.818	535.728	634.818
Comunidad Valenciana .....	94.404	289.372	380.702	502.939	622.161
<b>TOTALES .....</b>	<b>91.647</b>	<b>272.380</b>	<b>385.987</b>	<b>470.774</b>	<b>570.762</b>

COMUNIDAD	PORCENTAJE SOBRE LA RENTA FAMILIAR POR HABITANTE DE ESPAÑA					% variación a precios constantes 1973/1985
	1973	1980	1981	1982	1985	
Andalucía .....	77,8	80,3	81,6	78,7	80,2	20,09
Aragón .....	98,7	108,4	101,5	101,3	108,6	26,40
<u>Asturias .....</u>	<u>85,7</u>	<u>98,3</u>	<u>104,7</u>	<u>97,5</u>	<u>95,8</u>	<u>18,81</u>
Baleares .....	128,8	125,4	129,4	137,9	134,8	22,30
Canarias .....	86,0	88,5	88,8	89,8	88,3	19,88
Cantabria .....	100,1	97,5	101,8	102,8	99,0	15,54
Castilla-La Mancha .....	79,5	84,1	77,4	78,0	80,5	18,00
Castilla-León .....	84,3	89,5	85,7	89,8	91,3	28,25
Cataluña .....	123,2	121,7	121,7	122,5	119,3	13,56
Extremadura .....	87,2	70,6	71,7	66,1	78,6	32,61
Galicia .....	78,8	90,8	87,0	85,8	85,5	27,17
Madrid .....	133,2	119,3	123,0	122,0	121,3	6,16
Murcia .....	84,1	88,3	85,0	85,2	90,0	25,20
Navarra .....	109,8	103,1	101,9	107,2	103,4	10,08
País Vasco .....	128,3	100,0	104,1	107,9	99,3	-9,13
La Rioja .....	103,3	111,3	104,3	113,8	111,2	25,12
Comunidad Valenciana .....	103,0	106,2	104,0	108,8	109,0	23,29
<b>TOTALES .....</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>16,69</b>

Fuente: Tomado de Julio Alcaide Inchausti, "Las cuatro Españas económicas y la solidaridad regional", Papeles de Economía Española, nº34, 1988, p.79.

Cuadro 6  
**RESULTADOS DE LAS ELECCIONES CELEBRADAS EN ASTURIAS**

	Elecciones generales				Elecciones regionales	
	1977	1979	1982	1986	1983	1987
Extrema derecha	1,8	2,6	0,5	0,2	--	0,2
Derecha	13,6	8,7	28,1	27,4	30,4	25,5
Centro	31,4	33,1	9,6	14,1	3,9	19,4
Socialistas	39,2	37,4	52,4*	46,2*	52,2*	39,3
Comunistas	10,4	13,8	8,2	9,2	10,8	12,2
Regionalistas	1,9	0,6	--	--	0,5	1,8
Otros	1,7	3,8	1,2	2,9	2,2	1,6
Votos válidos	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

\* Consigue mayoría absoluta de puestos en el respectivo órgano parlamentario

Fuente: Sadei, Atlas electoral de Asturias

*Doc 001/1988*

*JUAN A. VAZQUEZ GARCIA.- Las intervenciones estatales en la minería del carbón.*

*Doc 002/1988*

*CARLOS MONASTERIO ESCUDERO.- Una valoración crítica del nuevo sistema de financiación autonómica.*

*Doc 003/1988*

*ANA ISABEL FERNANDEZ ALVAREZ; RAFAEL GARCIA RODRIGUEZ; JUAN VENTURA VICTORIA.- Análisis del crecimiento sostenible por los distintos sectores empresariales.*

*Doc 004/1988*

*JAVIER SUAREZ PANDIELLO.- Una propuesta para la integración multijurisdiccional.*

*Doc 005/1989*

*LUIS JULIO TASCÓN FERNANDEZ; JOSE MANUEL DIEZ MODINO.- La modernización del sector agrario en la provincia de León.*

*Doc nº 006/1989*

*JOSE MANUEL PRADO LORENZO.- El principio de gestión continuada: Evolución e implicaciones.*

*Doc nº 007/1989*

*JAVIER SUAREZ PANDIELLO.- El gasto público del Ayuntamiento de Oviedo (1982-88).*

*Doc 008/1989*

*FELIX LOBO ALEU.- El gasto público en productos industriales para la salud.*

*Doc 009/1989*

*FELIX LOBO ALEU.- La evolución de las patentes sobre medicamentos en los países desarrollados.*

*Doc 010/1990*

*RODOLFO VAZQUEZ CASIELLES.- Investigación de las preferencias del consumidor mediante análisis de conjunto.*

*Doc 011/1990*

*ANTONIO APARICIO PEREZ.- Infracciones y sanciones en materia tributaria.*

*Doc 012/1990*

*MONTSERRAT DIAZ FERNANDEZ; CONCEPCION GONZALEZ VEIGA.- Una aproximación metodológica al estudio de las matemáticas aplicadas a la economía.*

*Doc 013/1990*

*EQUIPO MECO.- Medidas de desigualdad: un estudio analítico*

*Doc 014/1990*

*JAVIER SUAREZ PANDIELLO.- Una estimación de las necesidades de gasto para los municipios de menor dimensión.*

*Doc 015/1990*

*ANTONIO MARTINEZ ARIAS.- Auditoria de la información financiera.*

*Doc 016/1990*

*MONTSERRAT DIAZ FERNANDEZ.- La población como variable endógena.*

*Doc 017/1990*

*JAVIER SUAREZ PANDIELLO.- La redistribución local en los países de nuestro entorno.*

*Doc 018/1990*

*RODOLFO GUTIERREZ PALACIOS; JOSE MARIA GARCIA BLANCO.- "Los aspectos invisibles" del declive económico: el caso de Asturias.*

*Doc 019/1990*

*RODOLFO VAZQUEZ CASIELLES; JUAN TRESPALACIOS GUTIERREZ.- La política de precios en los establecimientos detallistas.*

*Doc 020/1990*

*CANDIDO PAÑEDA FERNANDEZ.- La demarcación de la economía  
(Seguida de un apéndice sobre su relación con la Estructura  
Económica).*